

Expediente: 2021/G01_02/000038	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
Referencia: [REDACTED]	
Asunto: irregularidades proceso selectivo TAG	
Denunciado: Ayuntamiento de Sueca	

RESOLUCIÓN DE CONCLUSIÓN DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN

Visto el expediente de referencia instruido con motivo de la denuncia sobre irregularidades en relación con el la convocatoria y desarrollo de un proceso selectivo de personal en la administración pública, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Hechos Denunciados.

Mediante escrito a través del buzón de denuncias de esta Agencia se presentó alerta relativa a "Ayuntamiento de Sueca: fraude en selección de personal funcionario."

La persona alertadora manifiesta:

"Esta semana se ha publicado en el BOP números 17 y 18 de 27 y 28 de enero de 2021, varias convocatorias del Ayuntamiento de Sueca (Valencia). Los expedientes son 4. (...)

Los cuatro expedientes han sido elaborados por el mismo técnico. Sin embargo, él sólo ha informado 3 de los 4 expedientes, dado que es interesado en el expediente de la plaza de TAG, por lo que el informe lo ha firmado la Secretaria General del Ayuntamiento.

(...) se le ha creado una plaza específica para él dado que en este Departamento el Técnico titular está de baja por enfermedad. Anteriormente a esa fecha, estaba como técnico interino de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Gandía y el Alcalde de Sueca le propuso (como es nacido en Sueca) entrar en el Departamento de Personal de Sueca con una cesión de bolsa del Ayuntamiento de Gandía.

(...). Para sacar esta plaza de TAG de la OPE 2020, se ha usado el sistema de concurso-oposición (...) que si bien es legal, el único límite que tiene es el del artículo 8 del DECRETO 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. Si comprueban la redacción de las bases verán que se dice que la suma de las puntuaciones de la fase de oposición "representa" el 60% de la puntuación total del proceso. Basta con sumar los puntos y hacer una regla de tres para saber que esta afirmación ES FALSA.

(...)

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	1/24

Por otro lado, el expediente hace aguas en el temario. (...)

(...)

Ustedes como Agencia Antifraude son los únicos que pueden informar a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno (Sección de Control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales) para que impugne los acuerdos de las Bases que realizó la Junta de Gobierno Local de Sueca y si hace falta pueden presentar recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo. (...).

SEGUNDO.- Apertura de Expediente.

La alerta interpuesta dio lugar a la apertura por parte de la Agencia del expediente identificado con el número **2021/G01_02/000038**.

TERCERO.- Informe Previo.

En fecha 17 de noviembre de 2021 se ha emitido informe previo por funcionarios de esta Agencia proponiendo el inicio de la fase de investigación en el expediente.

CUARTO.- Resolución de Inicio de Actuaciones de Investigación.

En fecha 20 de noviembre de 2021 se remitió a la entidad autora de los hechos Resolución de inicio de actuaciones de investigación, cuya recepción consta acreditada en el expediente.

En la citada Resolución, se requería la aportación de la siguiente documentación, cuyo texto literal se transcribe a continuación, y se otorgó un plazo de 10 días hábiles para su cumplimentación:

"1. Copia de los informes jurídicos emitidos en expediente administrativo correspondiente a la aprobación de las BASES en relación la convocatoria del proceso selectivo "PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE TORN LLIURE, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ".

2. Informe emitido por la Secretaria General del ayuntamiento sobre el cumplimiento de las BASES en relación la convocatoria del proceso selectivo "PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE TORN LLIURE, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ" de lo establecido el art. 8.4 del "Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana", que fija el límite máximo a puntuar en la fase de concurso en un 40%."

La entidad remitió a la Agencia determinada documentación en fecha 29 de noviembre de 2021.

QUINTO.- Informe Provisional.

En fecha 21 de diciembre de 2021 se emitió informe provisional por funcionarios de la Agencia.

C/ Navellos, 14 - 3ª
46003 VALÈNCIA
Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

2

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	2/24

Dicho informe provisional fue notificado en fecha 24 de diciembre de 2021 al ayuntamiento de Sueca para su conocimiento concediendo el plazo de alegaciones.

SEXTO. Trámite de Audiencia.

Tras el informe provisional se concedió trámite de audiencia por un plazo de **10 días hábiles** a contar desde la recepción del informe para que las entidades afectadas pudieran formular las alegaciones oportunas ante la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

En fecha 5 de enero de 2022 ha tenido entrada en el Registro General Electrónico de esta Agencia, el escrito de alegaciones del ayuntamiento de Sueca.

SÉPTIMO. Informe Final de Investigación.

En fecha 24 de enero de 2022 se emitió informe final de investigación por funcionarios de la Agencia, de conformidad con el art. 39 de la Resolución de 27 de junio de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba Reglamento de funcionamiento y régimen interior de esta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS

De las actuaciones de análisis e investigación desarrolladas por esta Agencia y plasmadas en el cuerpo del Informe Provisional se dedujeron los siguientes hechos y conclusiones, sobre los que los interesados han realizado las manifestaciones que se indican.

PRIMERO. Análisis de los hechos puestos de manifiesto en la denuncia.

Debe señalarse, en primer lugar, que los hechos que se denuncian son determinadas irregularidades en relación la convocatoria del proceso selectivo "PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE TORN LLIURE, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ".

En concreto, se denuncian las siguientes irregularidades:

1. Que las bases afirman que la valoración de la fase de oposición supone el 60% de la puntuación total y que la valoración de la fase de concurso supone el 40% de la puntuación total, y ello es falso, como puede demostrar una simple suma y aplicación de una regla de tres.
2. Que el temario no es apropiado para la selección de un TAG, pues únicamente cuenta con 1 tema de Urbanismo, cuando en un Ayuntamiento es una de las áreas fundamentales en las que interviene un TAG; 5 temas de contratos públicos cuando

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	3/24

es otra área principal de la gestión diaria municipal y 33 de Recursos Humanos, lo que supone una desproporción clara.

3. Que el Interventor del Ayuntamiento fiscalizó este expediente y no advirtió en su informe de las ilegalidades de procedimiento administrativo, ni tampoco la Secretaria General titular ni la accidental que estaba en el momento de aprobación del acuerdo de las bases.

4. Que la Agencia Antifraude es la única que puede informar a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno (Sección de Control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales) para que impugne los acuerdos de las Bases que realizó la Junta de Gobierno Local de Sueca y si hace falta presentar recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo.

Junto con la denuncia se aportan un total de 19 documentos tanto del proceso selectivo denunciado como de otros procedimientos selectivos.

SEGUNDO.- Hechos e irregularidades constatadas en la Fase de Análisis.

A la vista de las anteriores manifestaciones, cabe hacer constar lo siguiente.

En primer lugar, que, en efecto, la suma de las calificaciones máximas a obtener en cada una de las fases del proceso selectivo mediante concurso-oposición supone un porcentaje superior al 40% de la fase de concurso, obteniéndose las siguientes magnitudes:

	PUNTUACION FASE	% SOBRE TOTAL
Fase oposición	10+10+10+3 = 33	55,93 %
Fase de concurso	26	44,07 %

La anterior proporción excede de los límites máximos permitidos por el art. 8.4 del “**Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana**”.

En segundo lugar, se comprueba que el temario está compuesto por un total de 90 temas repartidos en 5 bloques, siendo el más numeroso el correspondiente a la parte de gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas.

En tercer lugar, se ha comprobado la existencia de informe de Secretaria de 16 de diciembre de 2020, que no refleja la existencia de ninguna irregularidad al respecto de las Bases de la convocatoria citada.

Finalmente, al respecto de la presentación de denuncia ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno a efectos de la impugnación de las Bases ante la jurisdicción contencioso-administrativa, los procedimientos de denuncia regulados en esta Agencia no pueden erigirse como mecanismos sustitutivos de la acción que corresponde a los interesados, tanto en la vía de recursos administrativos ni en vía jurisdiccional.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	4/24

En conclusión, se constataron irregularidades que debían ser investigados, a saber, el hecho que de la suma de las puntuaciones de la fase de concurso exceda, por 4 puntos porcentuales, del máximo admisible de conformidad con la normativa de aplicación, con las consecuencias que de ello se pueden derivar.

De los hechos referidos, se comprueba existencia de indicios razonables de veracidad.

Sentado lo anterior, esta Agencia procedió a iniciar la Fase de Investigación del expediente.

TERCERO.- Hechos e irregularidades constatadas en la Fase de Investigación.

A la vista de lo anterior, en fecha 20 de noviembre de 2021 se remitió a la entidad autora de los hechos Resolución de Inicio de Actuaciones de Investigación, cuya recepción consta acreditada en el expediente.

En la citada Resolución, se requería la aportación de la documentación referida anteriormente.

En respuesta a lo anterior, el Ayuntamiento aportó, en fecha 29 de noviembre de 2021, lo siguiente:

“- Los informe jurídicos emitidos en expediente administrativo correspondiente a la aprobación de las BASES en relación a la convocatoria de proceso selectivo “PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE TORN LLIURE, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ”.

- Informe emitido por la Secretaria General del ayuntamiento sobre el cumplimiento del las BASES en relación a la convocatoria del proceso selectivo “PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE TORN LLIURE, MITJANÇANT EL SISTEMA CONCURS OPOSICIÓ” de lo establecido en el art. 8.4. Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,” que fija el límite máximo a puntuar en la fase de concurso en un 40%.”

Del estudio de la anterior documentación, se constata:

1. En el Informe de la Secretaría Municipal:

“PRIMER. RESPECTE LA REGULACIÓ DE LA FASE DE CONCURS EN EL DECRET 3/2017, DE 13 DE GENER

CSV (Código de Verificación Segura)		Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación		Página	5/24

Regula l'article 8.4 del Decret 3/2017, de 13 de gener, de la Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana:
«4. En qualsevol cas, la màxima puntuació que puga obtindre's en la fase de concurs no excedirà mai d'un 40 per cent de la puntuació total del concurs oposició »

SEGON. RESPECTE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de desembre de 2020, concreta en la base octava, en posterioritat a la descripció de la fase de concurs:

«La puntuació màxima a obtindre en tots els apartats serà de 26 punts, que correspon al 40% del total de la puntuació »

TERCER. APLICACIÓ DEL PERCENTATGE

L'AVA aplica al total de punts del procés, la que correspon a la fase d'oposició i concurs de manera que el resultat és de 55,93% de la fase d'oposició i del 44,07% de la fase de concurs, superior al màxim legal del 40%.

Ara bé, no es considera que l'aplicació per extreure el % es realitze d'eixa manera, sinó que s'aplica el percentatge del màxim legal establert tant a la fase d'oposició com a la del concurs, però respecte la puntuació que en les bases es puga establir.

És a dir, la normativa no limita les puntuacions a poder calcular en cada apartat, ni en les proves ni la valoració a realitzar en la fase de concurs, sinó que el que es concreta és el valor final màxim que pot tenir cadascuna d'estes puntuacions.

D'esta forma, el que es realitza, tal i com s'ha fet en el present procés, és als resultats finals, aplicar el percentatge màxim legal i ponderar la nota en base a aquest resultat, respectant així el màxim legalment permès.

Així, es pot observar en l'edicta del resultat final, en el punt segon en quan al resultat del procés selectiu, apareix la nota d'oposició i la de concurs, així com la seua ponderació aplicable el percentatge màxim legalment establert, observant-se com es corregeix al alça la nota d'oposició i a la baixa la nota del concurs, com a conseqüència a dita ponderació, per respectar en tot moment la legalitat vigent. (S'adjunta en la documentació el referit edicta).

En relació al que s'ha indicat es realitza la següents

CONCLUSIONS

PRIMER. Donar compte a l'Agència Valenciana Antifrau de la forma que s'ha procedit per a calcular la nota final de les fases d'oposició i concurs, per a respectar en tot moment la legalitat en quan a la valoració dels resultats màxims a obtenir tant en la fase d'oposició com a la del concurs del procés selectiu de TAG.

SEGON. Remetre la documentació sol·licitada a l'AVA per donar compliment al requeriment realitzat.

La qual cosa s'informa als efectes oportuns sense perjudici d'altres informes millors fonamentats en dret que es pugen emetre."

2. En el Edicto de 28 de junio de 2021:

C/ Navellos, 14 - 3ª
 46003 VALÈNCIA
 Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	6/24

	NOTA OPOSICIÓ	PUNTS OPOS. (PONDERACIÓ NOTA 60%)	NOTA CONCURS	PUNTS CONCURS (PONDERACIÓ NOTA 40%)	TOTAL
	25,53	27,39	24,50	22,29	49,63
	21,96	23,56	7,80	7,08	30,64
	21,36	22,91	6,06	5,50	28,41
	18,16	19,48	6,75	6,13	25,61

"SEGON. Havent finalitzat el procés selectiu per a la selecció en propietat d'una plaça de Tècnic Administració General, el resultat final obtingut és:

TERCER.- Donar un termini de cinc dies naturals a l'aspirant que ha quedat en primer lloc per a la presentació de la documentació acreditativa dels requisits exigits en la base quarta de la convocatòria, comptadors a partir de l'endemà al de la publicació del present edicte.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Contra les resolucions del tribunal qualificador, així com també contra els seus actes de tràmit que hi impedisquen continuar el procediment o hi produïsquen indefensió, els interessats hi poden interposar el recurs d'alçada previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes, davant el tribunal o davant de l'òrgan municipal competent en la matèria.

Una vegada transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que hi haja recaigut resolució, el recurs es podrà entendre desestimat.

Tot això sense perjudici que s'hi pugua exercitar qualsevol altre recurs que s'hi estime pertinent."

CUARTO.- Jurisprudencia aplicable.

Resulta aplicable al presente caso el supuesto enjuiciado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de los de Valencia, en la Sentencia n.º 135/2015, de 27 de abril de 2015, de la que cabe resaltar el siguiente pasaje:

SEGUNDO.- Examinado el expediente administrativo y estudiadas las alegaciones de las partes, la conclusión inicial que se alcanza es sin duda la de la falta de ajuste a derecho de la Base 7ª impugnada, pues resulta manifiesto que la puntuación asignada a la misma excede de los límites (40%) permitidos por el art. 5.4 del Decreto 33/1999 de 24 de marzo, al que se remite el Decreto 88/2001 de 24 de abril en que se basa el concurso oposición objeto del presente litigio. Ninguna de las alegaciones efectuadas por los demandados en su defensa pueden ser aceptadas, ya que la facultad del Tribunal de puntuar a los concurrentes ni tiene ni puede tener por objeto corregir las ilegalidades en que hayan incurrido las bases (Alegación del Ayuntamiento), entre otras cosas porque en tal caso estaría no sujetándose a éstas, sino modificándolas. De la misma manera, tampoco puede sostenerse que el 40% de puntuación venga referido al conjunto del proceso selectivo con inclusión del curso formativo en el IVASPE, pues como señala el art. 6.1 del citado Decreto 33/1999: "1. En las respectivas convocatorias podrá establecerse que, una vez superada la oposición o el concurso-oposición, los aspirantes deban superar un curso de formación prestar sus servicios a la administración durante un período de prácticas, los cuales podrán tener carácter selectivo y ser evaluados a efectos de obtener el orden definitivo de puntuación de los aspirantes. Ninguna de dichas fases, o ambas conjuntamente si se establecieran las dos, podrá superar los seis meses de duración.", esto es, que se trata de una fase claramente diferenciada y posterior al concurso oposición eliminatorio. El concurso oposición consta a su vez de dos fases propias (Prueba selectiva y evaluación de méritos) con arreglo al art. 5.1, y a ellas se refiere el límite establecido en el art. 5.4, por lo que es claro que en el caso de autos el mismo se infringe.

C/ N.
460C
Tel.
http:

7

CSV (Código de Verificación Segura)		Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación		Página	7/24

En conclusión, tal y como indica el juzgador, *“la facultad del Tribunal de puntuar a los concurrentes ni tiene ni puede tener por objeto corregir las ilegalidades en que hayan incurrido las bases (alegación del Ayuntamiento), entre otras cosas, porque en tal caso estaría no sujetándose a éstas, sino modificándolas”*.

QUINTO.- Conclusiones provisionales.

De todo lo constatado en los apartados anteriores, procede CONCLUIR:

1ª) En primer lugar, que la suma de las calificaciones máximas a obtener en cada una de las fases del proceso selectivo mediante concurso-oposición supone un porcentaje superior al 40% de la fase de concurso, obteniéndose las siguientes magnitudes:

PUNTUACION FASE	% SOBRE TOTAL
10+10+10+3 = 33	55,93 %
26	44,07 %

La anterior proporción excede de los límites máximos permitidos por el art. 8.4 del “Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana”.

2ª) El Ayuntamiento de Sueca, a través de su Secretaría General manifiesta, al respecto de la anterior conclusión que no se considera que el cálculo realizado por esta Agencia haya sido realizado de la forma esperada por la norma, ya que la misma no limita las puntuaciones a poder calcular en cada apartado de la fase de oposición ni de la de concurso, sino que concreta el valor final máximo que puede corresponder a cada uno de dichos apartados. En el proceso selectivo analizado, se daría cumplimiento a la normativa efectuando por parte del Tribunal una ponderación de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso de méritos, a fin de ajustar las mismas a los límites respectivos del 60% y 40%.

3ª) No obstante lo anterior, la jurisprudencia analizada por esta Agencia ha establecido que *“la facultad del Tribunal de puntuar a los concurrentes ni tiene ni puede tener por objeto corregir las ilegalidades en que hayan incurrido las bases (alegación del Ayuntamiento), entre otras cosas, porque en tal caso estaría no sujetándose a éstas, sino modificándolas”*.

SEXTO.- Alegaciones de los interesados formuladas en el trámite de audiencia.

Con fecha 5 de enero de 2022 se presentó por Registro General de esta Agencia (n.º 2022000013) escrito de alegaciones por el Ayuntamiento de Sueca, aportando informe de Secretaría, en el que se hace constar lo siguiente:

C/ Navellos, 14 - 3ª
 46003 VALÈNCIA
 Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	8/24

"INFORME DE SECRETARIA

Que emet M.C.S.M.G., Secretària de l'Ajuntament de Sueca, per a fer constar els següents:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 25 de novembre de 2021, per RGE 16076 es rep notificació de l'Agència Valenciana Antifrau sol·licitant els informes jurídics emesos en l'expedient administratiu a l'aprovació de les bases en relació a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de Tècnic d'Administració General, de torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició, així com informe emès per la Secretaria General sobre el compliment de les bases en relació allò establert en l'article 8.4 del Decret 3/2017, de 13 de gener, de la Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que fixa el límit màxim a puntuar en la fase de concurs en un 40%.

SEGON. En data 29 de novembre de 2021, per registre general d'eixida 10339/2021 es remet a l'AVA informe d'esta Secretaria respecte els motius que portaren al tribunal qualificador a procedir a la valoració de la fase de concurs, en ares al compliment de la legalitat vigent així com de la correcta aplicació d'esta fase del procés selectiu, que va portar a la ponderació dels resultats finals per ajustar-se al compliment d'allò establert per les bases de la convocatòria.

TERCER. En data 27 de desembre de 2021 per RGE número 17392/2021 es rep escrit de l'AVA en el que es resol concedir un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions a les **conclusions formulades en el sentit de considerar que el Tribunal qualificador quan va procedir a la ponderació de les notes de la fase d'oposició i concurs al 60 i 40% respectivament, ha procedit a corregir una il·legalitat de les bases de la convocatòria, considerant que és un extralimitació no permesa per la jurisprudència.**

En relació a l'antecedent de fet, cal realitzar els següents:

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. RESPECTE LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES DELS PROCESSOS SELECTIUS

Les bases de les convocatòries tenen naturalesa d'actes administratius amb efectes generals, i constitueixen el marc regulador de cada procediment selectiu, que es dicten ofici.

D'esta forma, les convocatòries es poden articular en el que es pot nomenar "la llei del concurs" (STS 20 de juliol de 2015, rec. 20602014) o les "regles del joc" que no podran desconèixer-se ni per l'administració ni pels participants (STS de 18 de febrer de 2015, rec. 3464/2013).

SEGON. IMPUGNACIÓ I RECURSOS CONTRA LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES

En referència al que s'ha indicat en el punt anterior, la doctrina clàssica mantenia la rigidesa i impossibilitat de qüestionar la convocatòria, recolzant-se en la fermesa dels actes administratius. Ara bé, la jurisprudència ha precisat que la convocatòria viciada de nul·litat de ple dret podrà ser qüestionada al temps d'impugnar la resolució final del procediment selectiu, sense que es pugui valer un acte ferm i consentit. Per tant, sols es pot admetre la impugnació indirecta si concorren motius de nul·litat de ple dret, de manera que els vicis d'anul·labilitat que pugui comportar es beneficiaran de la condició d'acte consentit.

C/ Navellos, 14 - 3ª
46003 VALÈNCIA
Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

9

CSV (Código de Verificación Segura)		Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación		Página	9/24

Així ho sentència del Tribunal Suprem quan admet causes de nul·litat de ple dret que porten a una vulneració dels drets fonamentals (STS de 06 de juliol de 2015, rec. 674/2014).

Així mateix, STS de 06 de juny de 2012, recurs de cassació 738/2011, estableix «no cabe sino recordar una vez más que la jurisprudencia que ha admitido la impugnación, a través de los actos de aplicación, de las bases no recurridas en su momento, pero tal posibilidad se ha aceptado solamente a título de excepción en aquellos casos en que era evidente la nulidad de alguno de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia. Fuera de tal hipótesis, el criterio es contrario» Així, «si el recurrente no impugnó esas bases y no apreciamos razones para considerar que las mismas están incursas en una ilegalidad manifiesta» (STS del 25 de març de 2015, rec. 479/2014), no es podria ara entrar a debatre el fet que s'investiga per l'AVA, per dos motius:

- No va ser impugnat en el moment processal oportú en la publicació de les bases amb posterioritat a la seua aprovació, així com tampoc en l'aplicació dels diferents actes en referència a la baremació de la fase de concurs, resultat final del procés selectiu, nomenament i constitució de la borsa de treball.

- El motiu que ara s'investiga, no es tracta de cap motiu de nul·litat de ple dret dels que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 47, així com tampoc afecta a cap dret fonamental dels aspirants, ja que, encara que no s'haguera realitzat una ponderació dels resultats de la fase d'oposició i concurs, no s'haguera alterat el resultat final del procés selectiu per la diferència de punts entre l'aspirant que va quedar en primer lloc de la resta.

En esta línia d'afectació a drets fonamentals existeixen altres pronunciaments jurisdiccional, com la STSJ Castella La Manxa de 18 de desembre de 2015, recurs 59/2014, en el que concreta:

«Ahora bien, es imposible, a la vista de la evolución de la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, dejar de poner de manifiesta que en aquellos casos en los que se denuncie una vulneración grave del principio de igualdad en el acceso (no, por tanto, cualquier posible ilegalidad de las bases) el obstáculo que constituyen las Bases publicada no es un óbice definitivo a la necesidad de reparación de la igualdad vulnerada».

Per tant, es pot concloure que no es donen els motius i requisits, per considerar el fet ara investigat com un motiu de nul·litat de ple dret que permetria la impugnació de les bases fora de termini, quan en el temps que va resultar oportú no es va procedir a realitzar cap recurs contra les bases ni els actes d'aplicació, així com no es pot considerar afectat el dret d'igualtat d'accés, ja que d'inici tots els aspirants coneixien les puntuacions a baremar, el percentatge a aplicar, així com els resultats de les diferents parts, sense que afectara als participants ni el resultat final del procés, a la vista de les puntuacions finalment obtingudes.

Per altra banda, en quan a la impugnació de les bases per motius de nul·litat, cal realitzar una ponderació sobre el que haguera pogut variar l'acte administratiu impugnat. D'esta manera, la STS de 20 de juliol de 1992, indica «la teoria de la nul·litat dels actes administratius ha d'aplicar-se amb parsimònia, sent necessari ponderar sempre l'efecte que va produir la causa determinant de la invalidesa i les conseqüències distintes que s'haguera seguir del correcte procediment rector de les actuacions que es declaren nul·les, i per suposat, el que comporta la necessitat de comprovar si la indefensió es va produir, adverant si, retrotraent el procediment al moment en que l'efecte es va produir a fi de reproduir adequadament el tràmit omès o irregularment efectuat, el resultat d'això no seria distint del que es va produir quan la causa d'anul·labilitat de l'acte l'Administració creadora d'este no hauria ocorregut». En este sentit, cal indicar que de la vista de l'expedient administratiu i del resultat final, la puntuació del primer aspirant respecte el segon dista de 18,99 punts, per tant, no haguera tingut lloc cap modificació del resultat final.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	10/24

TERCER. POSSIBILITAT D'INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DE LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES PELS TRIBUNALS QUALIFICADORS

La sentència que es subscriu a continuació il·lustra la potestats i els límits del tribunal qualificador en quan a la possibilitat d'interpretació i aplicació de les bases de la convocatòria, seguint la línia del que s'ha considerat en el fonament de dret primer.

Així, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears del 21 de desembre de 2011, Res. 970/2011 (Rec. 260/2011), concreta en primer lloc que ha de partir-se de la premissa ja coneguda que les Bases de les Convocatòries vinculen l'Administració i als Tribunals de Selecció que han de jutjar les proves selectives així com als quals prenguen part en elles, amb el que, en definitiva, es ve a concretar que les esmentades bases constitueixen la llei de procés selectiu. En això incideix el Tribunal Suprem en les seues sentències de 8, de 4 febrer de 1990, 19 d'abril de 1991 i 13 d'abril de 1994.

En segon lloc, que a més de la discrecionalitat tècnica dels tribunals d'oposició respecte a la valoració dels mèrits en la seua dimensió tècnica, també ha de reconèixer-se a aquests tribunals un espai de lliure apreciació en la interpretació de les bases, fonamentada en una presumpció iuris tantum de certesa i raonabilitat de la seua actuació, recolzada en l'especialització i imparcialitat dels òrgans establits per a realitzar les qualificacions, de manera que només en el cas que es demostre la voluntat viciada de l'òrgan (desviació de poder) o l'existència d'errors palmaris, podrien anul·lar-se les seues decisions en el que tenen de discrecionals.

La STS 20.10.2008 reconeix l'autonomia del Tribunal qualificador a l'hora d'interpretar el contingut i abast de les bases de la convocatòria i com indica el Tribunal Constitucional STC 115/1996, amb cita de les SSTC 193/1987 i 353/1993:

"les modulacions que troba la plenitud de coneixement jurisdiccional només es justifiquen en una presumpció de certesa o de raonabilitat de l'actuació administrativa, recolzada en l'especialització i la imparcialitat dels òrgans establits per a realitzar la qualificació.

Una presumpció iuris tantum, per cert, d'aquí ve que sempre calga desvirtuar-la si s'acredita la infracció o el desconeixement del procedir raonable que es presumeix en l'òrgan qualificador, bé per desviació de poder, arbitrarietat o absència de tota justificació del criteri adoptat, entre altres motius per fundar-se en palès error, degudament acreditat per la part que ho al·lega (STC 353/1993) o (STC 34/1995)"

En conclusió, no advertit error, arbitrarietat o falta de raonabilitat en la interpretació sostinguda pel Tribunal Qualificador, els dubtes han de resoldre's a favor de mantindre's presumpció de certesa de l'actuació administrativa, recolzada en l'especialització i la imparcialitat dels òrgans establits per a realitzar la qualificació.

Per altra banda, també la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia del 7 de novembre de 2001, Res. 1312/2001 (Rec. 1078/1998) considera que el Tribunal qualificador està facultat per a fer una interpretació d'aquells puntuals aspectes no del tot especificats o detallats, sempre que en el desenvolupament d'aquella labor no s'infringisquen les pròpies bases, ni els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que per imperatiu constitucional li vinculen i això encara que aquella siga només una de les possibles opcions interpretatives.

En conseqüència, l'actuació del Tribunal en el sentit que interpreta les bases per a que les puntuacions dels diferents apartats entre en el paràmetre legal del 60% i 40% de la fase d'oposició i concurs respectivament, que en definitiva és el sentit que es pretenia en la redacció de les bases de la convocatòria, no es pot entendre com una actuació arbitrària o falta de raonabilitat, o com al·lega l'AVA en el sentit de voler modificar una il·legalitat de les bases, sinó donar una interpretació racional i equilibrada per assegurar la igualtat.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	11/24

QUART. POSSIBILITAT DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS EN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES

Vist tot el que s'ha assenyalat en els fonaments de dret, cal no obstant profunditzar en la possibilitat de modificar les bases per l'error concretat en el sentit d'indicar que els punts de la fase de concurs equivalia al 40% i la fase d'oposició al 60%, el que realment el que es pretenia era indicar, tal i com es va realitzar en la ponderació dels resultats finals, que el total del valor sumatori de cadascuna de les fases, amb independència del número de punts, havia de representar el 40 i 60% respectivament.

Entenent doncs que en les bases pot existir un error aritmètic, davant la situació plantejada es podria acudir a la rectificació d'errors conforme a l'article 109.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LPACAP):

«2. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

Ara bé, en matèria de rectificació d'errors la Jurisprudència ve exigint que l'objecte de la rectificació siga una simple equivocació elemental, tal com un nom, una data, una operació aritmètica o un error de transcripció d'algun document, equivocació que es derive de les pròpies dades que consten en l'expedient, i que es manifeste de manera clara, patent i ostensible, que s'evidencie per si sola, sense necessitat de majors raonaments ni, per descomptat, d'operacions valoratives sobre normes jurídiques. Per tant, l'error ha de ser manifest, que no plantege dubtes sobre la seua existència. Han de quedar excloses aquelles qüestions relatives a la interpretació, determinació o aplicació indeguda de les normes, si com els que es refereix a l'apreciació de les proves.

Com a exemple d'aquesta jurisprudència podem fer al·lusió a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, d'1 de juliol de 2019, Sala contenciosa administrativa, Secció 10a, (Rec. 83/2018) que arreplega una síntesi d'aquesta doctrina:

«La doctrina jurisprudencial sobre la rectificació d'errors materials, aritmètics i de fet, expressada, entre altres, en la sentència del Tribunal Suprem de 15 de febrer de 2006, ha vingut declarant que l'error material o de fet es caracteritza per ser ostensible, manifest i indiscutible, implicant, per si solament, l'evidència d'aquest, sense necessitat de majors raonaments, i exterioritzant-se «primera facie» per la seua sola contemplació (enfront del caràcter de qualificació jurídica, seguida d'una declaració basada en ella, que ostenta l'error de dret)».

En aquest sentit la Sentències del Tribunal Suprem de 6 d'abril de 1988 (Roj: STS 2483/1988) i Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de gener de 1995 (Roj: STS 8258/1995) recorden el criteri jurisprudencial consolidat en el que concerneix a l'abast del «error de fet», assenyalant que ha de considerar-se per tal «a aquell que veure's sobre un fet, cosa o succés, és a dir, quelcom que es refereix a una realitat independent de tota opinió, criteri particular o qualificació havent de posseir les notes de ser evident, indiscutible i manifest»; quedant exclòs del seu àmbit, per tant, «tot allò que es refereix a qüestions jurídiques, apreciació de la transcendència o abast dels fets indubtables, valoració de les proves i interpretació de les disposicions i qualificacions que puguen establir-se» (Sentència del Tribunal Suprem, de 4 d'octubre de 1993, entre altres), o siga, tot el que vaja més enllà dels pressupostos fàctics determinants de la decisió administrativa (Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de juliol de 1992).

La rectificació no ha de suposar una modificació.

Una vegada realitzada la correcció, l'acte que resulte després d'ella ha de tenir aquest contingut després de la rectificació, ja que l'única finalitat és eliminar els errors materials, és a dir no es pot alterar el sentit de l'acte.

Per recolzar esta tesi es pot citar la més recent Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 (STS 2670/2018):

C/ Navellos, 14 - 3ª
 46003 VALÈNCIA
 Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	12/24

«Per a poder aplicar aquest mecanisme excepcional que permet rectificar una resolució administrativa sense subjecció a termini, cal determinar si concorre el pressupost de fet previst en la norma: l'existència de l'error que, a més, ha de complir els requisits de ser material, de fet, o aritmètic. Doncs bé, tal com ha assenyalat una abundantíssima jurisprudència, entre altres STS de 29 de març de 2012, RC 2416 / 2009 i 24 de juny de 2015 (rec. 2256/2014) en les quals se cita una copiosa jurisprudència (STS de 18 de juny de 2001, recurs de cassació 2947/1993, amb cita de les sentències de 18 de maig de 1967, 15 d'octubre de 1984, 31 d'octubre de 1984, 16 de novembre de 1984, 30 de maig de 1985, 18 de setembre de 1985, 31 de gener de 1989, 13 de març de 1989, 29 de març de 1989, 9 d'octubre de 1989, 26 d'octubre de 1989, 20 de desembre de 1989, 27 de febrer de 1990, 23 de desembre de 1991, recurs núm. 1307/1989, 16 de novembre de 1998, recurs d'apel·lació número 8516/1992), perquè la seua viabilitat siga possible, aqueixa rectificació d'errors requereix el següent:

- 1) Que es tracte de simples equivocacions elementals de noms, dates, operacions aritmètiques o transcripcions de documents;**
- 2) Que l'error s'aprecie havent de comptar exclusivament les dades de l'expedient administratiu en el qual s'adverteix;**
- 3) Que l'error siga patent i clar, sense necessitat d'acudir a interpretacions de normes jurídiques aplicables;**
- 4) Que no es procedisca d'ofici a la revisió d'actes administratius fermes i consentits;**
- 5) Que no es produïska una alteració fonamental en el sentit de l'acte (doncs no existeix error material quan la seua apreciació implique un judici valoratiu o exigisca una operació de qualificació jurídica);**
- 6) Que no patisca la subsistència de l'acte administratiu és a dir, que no genere l'anul·lació o la revocació d'aquest, quan creador de drets subjectius, produint-se un de nou sobre bases diferents i sense les degudes garanties per a l'afectat, doncs l'acte administratiu rectificador ha de mostrar idèntic contingut dispositiu, substantiu i resolutori que l'acte rectificat, sense que pugui l'Administració, sota pretext de la seua potestat rectificadora d'ofici, encobrir una autèntica revisió».**

Continua dient el Tribunal Suprem que el procediment de rectificació no pot projectar-se més enllà dels objectius fixats per la naturalesa d'aqueixa institució, doncs, en cas contrari, el sistema de seguretat jurídica queda en dubte, ja que permetria rectificar en qualsevol moment resolucions administratives fermes. Per açò, aquesta previsió ha d'aplicar-se amb criteris restrictius, no solament quan la rectificació es realitza d'ofici per part de l'Administració per a introduir canvis en les seues resolucions sense acudir al procediment de revisió d'ofici o declaració de lesivitat, sinó també quan aquests canvis s'insten pels particulars pretenent rectificar resolucions administratives fóra dels terminis marcats per a entaular els recursos administratius i/o judicials corresponents.

En base a la jurisprudència indicada, es conseqüència, si es considera que procedeix una rectificació d'errors de les bases de la convocatòria, no hauria de tenir més transcendència que la seua clarificació en quan a la puntuació de les fases d'oposició i concurs, en el sentit que es tracta d'unes bases fermes i consentides tal i com s'ha indicat en el fonament de dret segon, i respecte uns actes administratius en els que es va poder realitzar les al·legacions pertinents quan es van publicar els resultats finals del procés selectiu, així com les resolucions dels nomenaments per l'òrgan competent d'adjudicació de la plaça convocada, així com de la constitució de la corresponent borsa de treball respecte els aspirants que van aprovar el procés selectiu sense possibilitat d'adjudicació de plaça.

CINQUÈ. INTERPRETACIÓ RESPECTUOSA AMB LA CONSERVACIÓ D'ACTES INDEMNES

Cal indicar en aquest sentit la STS de 18 de maig de 2015 (rec. 3589/2013), en quan als efectes de la invalidesa d'un procediment selectiu respecte dels tercers de bona fe que van obtenir plaça exposa que «certament, en ocasions esta Sala ha considerat anul·lat un acte administratiu decisor d'un procés selectiu, pel temps transcorregut i la bona fe, l'estimació del recurs hauria d'afectar exclusivament als recurrents, mantenint

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	13/24

les qualificacions de qui en el seu dia va ser seleccionat i havent accedit de bona fe a la funció pública la ve exercint».

És per això, que l'aspirant que va quedar en primer lloc, s'ha subjecte des d'un inici a les bases publicades per l'administració, obtenint plaça pel resultat obtingut, sense ser possible en este moment processal poder anul·lar les actuacions fins el punt d'eliminar la plaça correctament obtinguda i que actualment està exercint.

En relació al que s'ha indicat es realitza la següents

CONCLUSIONS

PRIMER. Donar compte a l'Agència Valenciana Antifrau del present informe i tenir per complimentat el tràmit d'al·legacions en el termini legalment conferit, sol·licitant que siguen acceptats els arguments indicats en quan a la forma de procedir del tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa.

SEGON. Remetre la documentació sol·licitada a l'AVA per donar compliment al requeriment realitzat.

La qual cosa s'informa als efectes oportuns sense perjudici d'altres informes millors fonamentats en dret que es pugen emetre."

SÉPTIMO.- Análisis de las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia.

Las alegaciones presentadas por la entidad investigada pueden resumirse en los siguientes aspectos clave:

1º) Solo puede admitirse la revisión de la convocatoria si concurren vicios de nulidad de pleno de derecho. Por el contrario, si los vicios o irregularidades configuran supuestos de anulabilidad, deberá primar el beneficio de "acto firme consentido" y la existencia de tercero de buena afectados cuyo resultado no se hubiera visto alterado.

2º) Debe tenerse en cuenta que ni las bases ni ninguno de los actos concretos de ejecución de la convocatoria fueron impugnados en el momento procesal oportuno. Asimismo, no nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho.

3º) Por lo tanto, si se considerase que nos encontramos ante un supuesto de nulidad, se estaría permitiendo la impugnación de las bases fuera del plazo legal correspondiente.

4º) No se puede considerar vulnerado el derecho de acceso a la función pública, ya que todos los aspirantes conocían la puntuación a baremar, el porcentaje a aplicar, y los mecanismos de evaluación, sin que se haya

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	14/24

producido afectación alguna al resultado final del proceso que, en todo caso, se habría mantenido igual.

5º) A mayor abundamiento, existen límites al ejercicio de las facultades de revisión de los actos administrativos.

6º) Podría aplicarse el mecanismo de la rectificación de errores, pero no se dan tampoco los requisitos previos necesarios para su aplicación.

Al respecto de lo anterior, debe indicarse que el art. 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece expresamente unos límites para el ejercicio de las facultades administrativas de revisión de actos:

“Artículo 110. Límites de la revisión.

Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”

En el presente caso, hay que ponderar si el ejercicio de las facultades de revisión podría ser contrario a la buena fe, tanto del Órgano Técnico de Selección, como de los aspirantes concurrentes a la convocatoria.

Por otro lado, procede valorar el hecho de que el reajuste en la baremación de la convocatoria no hubiera comportado un cambio efectivo en la resolución de la misma, por lo que la corrección hubiera llevado al órgano administrativo a tomar exactamente la misma determinación ocurrida, dado que el resultado final del procedimiento si no existiera el error de las bases no hubiera sido distinto conforme a las puntuaciones otorgadas.

Pero tampoco puede ignorarse el hecho de que *de facto* se ha producido un incumplimiento normativo en la aprobación de las bases conforme a su redacción literal, que ha comportado que el OTS haya tenido que apartarse de las mismas, en orden a ajustar las puntuaciones finales a los conceptos legales, y ello supone una anomalía que podría ser susceptible de valorarse como vicio de nulidad de pleno de derecho, pero que a la vez debe ponderarse sus efectos con los límites a la revisión de los actos conforme se ha recogido previamente. Sin perjuicio de que deba ser corregida en convocatorias futuras la redacción de sus bases, para que no exista duda alguna sobre las puntuaciones a otorgar y los límites máximos legales aplicables.

En efecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de los de Valencia, en la Sentencia n.º 135/2015, de 27 de abril de 2015, que ya transcribimos parcialmente en el Informe Provisional, indica al respecto de lo anterior que:

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C.V.)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	15/24

Por lo que el juzgador estima que hay que tener en cuenta no sólo todo lo anterior, sino también la merma en los derechos de los “posibles afectados indeterminados” que no presentaron su solicitud de participación al proceso selectivo justamente debido al hecho de la defectuosa redacción de las bases que, como hemos dicho, no cumplían en su integridad con los requisitos normativos relativos a los porcentajes máximos de baremación, por lo que cabe recomendar al Ayuntamiento de Sueca que en las convocatorias futuras establezca de una forma clara el cumplimiento de lo establecido en el art. 8.4 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que establece que:

“4. En cualquier caso, la máxima puntuación que pueda obtenerse en la fase de concurso no excederá nunca de un 40% de la puntuación total del concurso-oposición.”

De forma que se eviten o reduzcan, en la medida de lo posible, los problemas interpretativos que puedan surgir en la ejecución de las convocatorias, y deban ser resueltos por los Órganos Técnicos de Selección que se constituyan en la entidad.

OCTAVO.- Conclusiones Finales.

De la investigación efectuada se han constatado los siguientes hechos e irregularidades:

1ª) En primer lugar, que la suma de las calificaciones máximas a obtener en cada una de las fases del proceso selectivo mediante concurso-oposición supone un porcentaje superior al 40% de la fase de concurso, obteniéndose las siguientes magnitudes:

	PUNTUACION FASE	% SOBRE TOTAL
Fase oposición	10+10+10+3 = 33	55,93 %
Fase de concurso	26	44,07 %

La anterior proporción excede de los límites máximos permitidos por el art. 8.4 del “Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana”.

2ª) El Ayuntamiento de Sueca, a través de su Secretaría General manifiesta, al respecto de la anterior conclusión que no se considera que el cálculo realizado por esta Agencia haya sido realizado de la forma esperada por la norma, ya que la misma no limita las puntuaciones a poder calcular en cada apartado de la fase de oposición ni de la de concurso, sino que concreta el valor final máximo que puede corresponder a cada uno de dichos apartados. En el proceso selectivo analizado, se daría cumplimiento a la normativa efectuando por parte del Tribunal una ponderación de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso de méritos, a fin de ajustar las mismas a los límites respectivos del 60% y 40%.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	16/24

3ª) No obstante lo anterior, la sentencia analizada por esta Agencia en caso análogo ha establecido que *“la facultad del Tribunal de puntuar a los concurrentes ni tiene ni puede tener por objeto corregir las ilegalidades en que hayan incurrido las bases (alegación del Ayuntamiento), entre otras cosas, porque en tal caso estaría no sujetándose a éstas, sino modificándolas”*.

4ª) Se alega que no se ha producido un supuesto de nulidad radical de pleno derecho, aspecto con el que esta Agencia no coincide si bien hay que ponderar si el ejercicio de las facultades de revisión podría ser contrario a la buena fe, tanto del Órgano Técnico de Selección, como de los aspirantes concurrentes a la convocatoria, y el hecho de que el resultado final del procedimiento si no existiera el error de las bases no hubiera sido distinto conforme a las puntuaciones otorgadas.

5ª) Siendo cierto lo anterior, también lo es el hecho de que una defectuosa redacción de unas bases, contraria a la normativa aplicable, es una anomalía que debe ser corregida, ya que no puede desconocerse que eventuales aspirantes indeterminados podrían haber concurrido al proceso selectivo en caso de que las bases hubieran sido redactadas conforme a norma, y que en el caso analizado se forzó al Órgano Técnico de Selección a tomar decisión que excedían su normal capacidad para interpretar las bases, llegando a modificarlas de hecho, por lo que procede finalizar el expediente con recomendaciones de mejora que el Ayuntamiento deberá atender.

NOVENO.- Calificación Jurídica.

De conformidad con la Resolución n.º 424, del Director de la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, de fecha 5 de octubre de 2020, por la que se concreta el ámbito de actuación material de esta Agencia, en los siguientes conceptos:

- a) Corrupción: Uso o desviación de poder o de recursos de procedencia pública para fines distintos de los concedidos; uso o abuso del poder público para obtener ventajas, beneficios o cualquier otro aprovechamiento particular, propio o de terceros, o para cualquier otro fin contrario al ordenamiento jurídico.*
- b) Fraude: Acto tendente a eludir una disposición legal de forma engañosa; uso inapropiado y perjudicial de los recursos y activos de una organización, contrario a la verdad y a la rectitud; uso o destino irregular de fondos o patrimonio públicos.*
- c) Irregularidades administrativas y comportamientos constitutivos de infracción administrativa o disciplinaria, en los que subyace una situación potencial de fraude o corrupción.*
- d) Conductas y actividades reprochables por ser contrarias a la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia, a la probidad, a la integridad, a la ética pública y al buen gobierno, así como la realización de gastos superfluos e innecesarios de fondos de procedencia pública, impliquen o no una infracción directa del ordenamiento jurídico positivo.*

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	17/24

En el presente caso, el relato incorporado a la denuncia junto con los demás elementos y documentos analizados no permite afirmar que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción por cuanto, en principio, se considera que para que exista fraude ó corrupción será necesario que se conjuguen los siguientes supuestos:

1. Que exista una actuación en la que un decisor público ejerza funciones públicas, administre o detente efectos presupuestarios, se posean, utilicen o dispongan bienes o derechos de titularidad de las administraciones, o afectos al interés o función pública.
2. Que la actuación no esté amparada por el Derecho de forma que no pueda ser justificada ni explicada de forma legal.
3. Que materialmente exista un resultado contrario al interés público que sea consecuencia de dicha actuación ilegal. Esto es, que se desvíe la acción pública de los intereses generales.
4. Que exista un designio, una consciencia y voluntariedad de estar infringiendo el derecho de forma que el sujeto es consciente de que su actuación tuerce los intereses generales.

Tras el estudio en detalle de la totalidad de la documentación aportada junto con la denuncia y de la documentación obtenida de fuentes abiertas, no se dispone de prueba o indicio del cumplimiento de los anteriores requisitos, y que fundamente la posible existencia de fraude o corrupción.

No obstante lo anterior, esta Agencia considera que se han producido déficits en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales reguladores de la actuación administrativa pública.

Un acto es inválido cuando está viciado alguno de sus elementos, si bien, según la importancia y trascendencia del vicio de que se trate, la invalidez podrá alcanzar el grado de nulidad, anulabilidad o tratarse de una irregularidad no invalidante.

Los supuestos legales de la nulidad de pleno derecho son, exclusivamente, los contemplados en el artículo 47.1 de la ley 39/2015.

El artículo 48 de la Ley 39/2015 define los actos anulables como aquellos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder y refiere que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados y que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Por lo tanto, no todas las irregularidades del acto administrativo lo hacen anulable. En este sentido, se consideran irregularidades no invalidantes a aquellos defectos formales que no desarticulen el acto administrativo.

Es decir, si la irregularidad no priva al acto de aquellos requisitos indispensables para que alcance su fin (ni produce indefensión al interesado) no permitirá promover la anulabilidad del mismo (apartado 2 del citado artículo 48).

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	18/24

Analizada la normativa aplicable y vista la documentación obrante en el expediente, se considera que las irregularidades o deficiencias de los procedimientos administrativos detectadas en las actuaciones de análisis e investigación del presente expediente, no se encuentran incardinadas en ninguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho ni de anulabilidad, tratándose de irregularidades no invalidantes de los actos administrativos dictados desde el punto de vista administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Conclusión de las actuaciones

El artículo 16 de la Ley 11/2016 dice que finalizada la tramitación, el director o directora de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana:

1. Deberá emitir un informe motivado sobre las conclusiones de las investigaciones, que deberá tramitar el órgano que corresponda en cada caso, el cual, posteriormente y en el plazo que se haya establecido en el informe, deberá informar al director o la directora de la agencia sobre las medidas adoptadas o, en su caso, los motivos que le impiden actuar de acuerdo con las recomendaciones formuladas.
2. Finalizará el procedimiento, en su caso, con archivo de las actuaciones. El archivo será comunicado al denunciante o solicitante en escrito motivado.
3. Iniciará un procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
4. Si en el curso de las actuaciones emprendidas por la agencia se observan indicios de que se hayan cometido infracciones disciplinarias, el director o la directora de la agencia lo deberá comunicar al órgano que en cada caso corresponda. Si hay indicios de que hayan tenido lugar conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito, se trasladará de forma inmediata al ministerio fiscal o a la autoridad judicial y, en caso de que se pueda derivar una posible responsabilidad contable, se trasladará a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
5. **La agencia puede dirigir recomendaciones motivadas a las administraciones y a las entidades públicas en que se sugiera la modificación, la anulación o la incorporación de criterios con la finalidad de evitar las disfunciones o las prácticas administrativas susceptibles de mejora, en los supuestos y las áreas de riesgo de conductas irregulares detectadas.**
6. Si la relevancia social o la importancia de los hechos que hayan motivado la actuación de la agencia lo requieren, el director o la directora puede presentar a la comisión parlamentaria correspondiente, a iniciativa propia o por resolución de Les Corts, el informe o los informes extraordinarios que correspondan.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	19/24

SEGUNDO. Informe Final de Investigación

Se regula en el art. 39 de la Resolución de 27 de junio de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba Reglamento de funcionamiento y régimen interior de esta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat.

Artículo 39. Informe final de investigación

1. *Concluidas las actuaciones de investigación, se elaborará un informe final en el que se detallarán sus resultados, contemplando los hechos y circunstancias constatados, las personas que hayan participado, colaborado o intervenido en los mismos, y su posible calificación jurídica, así como las posibles responsabilidades.*
2. *El informe final de investigación será suscrito por la Agencia y en él se recogerán las alegaciones formuladas por las personas que pudieran resultar implicadas individualmente en los hechos objeto de investigación.*
3. *Este informe final será comunicado a la persona que denunció los hechos que dieron lugar a la investigación, salvo que se exija el mantenimiento del secreto en aras al buen fin de la investigación en la Agencia o en otro órgano.*

TERCERO. Finalización del procedimiento de investigación.

Se regula en el art. 40 de la Resolución de 27 de junio de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba Reglamento de funcionamiento y régimen interior de esta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat.

Artículo 40. Finalización del procedimiento de investigación

1. *Una vez finalizada la tramitación del expediente de investigación y sobre la base del informe final de investigación a que se refiere el artículo anterior, el director o directora de la Agencia, mediante resolución motivada podrá acordar:*

- a) *El archivo de las actuaciones de investigación, que será comunicado a los denunciantes o solicitantes. Si se constatan datos, elementos o circunstancias determinantes de los que no se tenía conocimiento en el momento de acordar el archivo del expediente de investigación, podrá acordarse su reapertura.*
- b) ***La formulación de todas aquellas recomendaciones conducentes a la adopción de las medidas que se estimen convenientes, pudiendo sugerir la modificación, la anulación o la incorporación de criterios con la finalidad de evitar disfunciones o prácticas administrativas susceptibles de mejora, en los supuestos y las áreas de riesgo de las conductas irregulares detectadas.***
- c) *Si se observan indicios de que se hayan cometido infracciones disciplinarias u otros hechos sancionables de acuerdo con la normativa sectorial, se comunicará al órgano competente.*

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	20/24

d) Si se advierten acciones u omisiones de las previstas en los artículos 17 y siguientes de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, se propondrá el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

e) En caso de que se pueda derivar una posible responsabilidad contable, se dará traslado a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

f) Si hay indicios de conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito, se dará traslado de forma inmediata al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.

2. Los informes de investigación, las resoluciones motivadas que pongan fin al procedimiento de investigación y los que tengan naturaleza de recomendación o de remisión de las actuaciones al órgano competente, no son susceptibles de recurso, puesto que no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico, ni deciden el fondo del asunto. Tampoco las comunicaciones o requerimientos que se realicen en el marco del procedimiento de investigación pueden ser objeto de recurso. Todo ello sin perjuicio del respeto al derecho de defensa y al derecho de acceso a la información de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

3. En el supuesto de que la relevancia social o la importancia de los hechos que han motivado las actuaciones de la Agencia lo requieran, la directora o director podrá presentar a la comisión parlamentaria correspondiente, a iniciativa propia o por resolución de les Corts, el informe o los informes extraordinarios que correspondan.

4. La Agencia comprobará que las autoridades competentes aplican las medidas administrativas, financieras, legislativas o disciplinarias que les ha recomendado, realizando su seguimiento mediante las actuaciones que considere adecuadas. A tal efecto, la Agencia puede dirigir recordatorios a la máxima autoridad del organismo afectado y solicitarle la remisión de un plan de implementación de las recomendaciones formuladas en el que se detallen las acciones, los plazos y las personas responsables de cada una de las actuaciones que hay que llevar a cabo, o bien las razones que le impiden adoptar las medidas propuestas.

5. En caso de que las autoridades afectadas no apliquen las recomendaciones propuestas ni justifiquen su inaplicación, la Agencia debe hacerlo constar en la memoria anual o en un informe extraordinario a les Corts, según corresponda. En cualquier caso, antes de hacer constar expresamente el incumplimiento, la Agencia debe comunicarlo, con la propuesta de memoria o informe, a la persona u órgano afectados a fin de que aleguen lo que crean conveniente.

CUARTO. Normativa específica.

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraud i la Corrupció de la C V)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	21/24

- Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana.

En razón a todo lo expuesto,

RESUELVO

PRIMERO.- Dar por finalizada la fase de investigación del presente expediente, elevando las siguientes conclusiones finales:

1ª.- La suma de las calificaciones máximas reguladas en las bases, para cada una de las fases del proceso selectivo mediante concurso-oposición supone un porcentaje superior al 40% de la fase de concurso, obteniéndose las siguientes magnitudes:

	PUNTUACION FASE	% SOBRE TOTAL
Fase oposición	10+10+10+3 = 33	55,93 %
Fase de concurso	26	44,07 %

La anterior proporción excede de los límites máximos permitidos por el art. 8.4 del “Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana”.

2ª) El Ayuntamiento de Sueca, mantiene que se ha dado cumplimiento a la normativa efectuando por parte del Tribunal una ponderación de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso de méritos, a fin de ajustar las mismas a los límites respectivos del 60% y 40%.

3ª) No obstante lo anterior, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de los de Valencia, en la Sentencia n.º 135/2015, de 27 de abril de 2015, analizada por esta Agencia en caso análogo ha establecido que “la facultad del Tribunal de puntuar a los concurrentes ni tiene ni puede tener por objeto corregir las ilegalidades en que hayan incurrido las bases (alegación del Ayuntamiento), entre otras cosas, porque en tal caso estaría no sujetándose a éstas, sino modificándolas”.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C.V.)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	22/24

4ª) Se ha producido un supuesto de nulidad de pleno derecho, si bien hay que ponderar los límites de la revisión de oficio al poder ser contrario a la buena fe, tanto del Órgano Técnico de Selección, como de los aspirantes concurrentes a la convocatoria, y el hecho de que el resultado final del procedimiento si no existiera el error de las bases no hubiera sido distinto conforme a las puntuaciones otorgadas en el proceso.

5ª) La defectuosa redacción de unas bases, contraria a la normativa aplicable, es una anomalía que debe ser corregida, ya que no puede desconocerse que eventuales aspirantes indeterminados podrían haber concurrido al proceso selectivo en caso de que las bases hubieran sido redactadas conforme a norma, y no debiendo el Órgano Técnico de Selección tomar una decisión, que excedía de su normal capacidad para interpretar las bases llegando a modificarlas de facto.

SEGUNDO.- Formular las siguientes **RECOMENDACIONES**, que deberá atender y tramitar el Ayuntamiento de Sueca:

Considerando que la actuación descrita en la presente investigación podría encuadrarse en un supuesto de nulidad de pleno de derecho, si bien ponderando los límites de la revisión de oficio en el presente expediente, así como si el ejercicio de las facultades de revisión podría ser contrario a la buena fe, tanto del Órgano Técnico de Selección, como de los aspirantes concurrentes a la convocatoria, y el hecho de que el resultado final del procedimiento si no existiera el error de las bases no hubiera sido distinto conforme a las puntuaciones otorgadas; se **recomienda al ayuntamiento que proceda a dictar las instrucciones internas necesarias, para asegurar el cumplimiento de la normativa administrativa para la selección de personal, mediante concurso-oposición, y en particular:**

- Que en las convocatorias futuras se establezca de una forma clara e inequívoca el cumplimiento de lo establecido en el art. 8.4 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que establece que:

“4. En cualquier caso, la máxima puntuación que pueda obtenerse en la fase de concurso no excederá nunca de un 40% de la puntuación total del concurso-oposición.”

De forma que no se trasladen problemas interpretativos en la ejecución de las convocatorias, y deban ser resueltos por los Órganos Técnicos de Selección que se constituyan en la entidad sobre una materia de regulación reglada.

CSV (Código de Verificación Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció i Lluita Contra el Fraude i la Corrupció de la C.V.)		
Url de verificación	[REDACTED]	Página	23/24

TERCERO. Notificar la resolució que pone fin al procedimiento de investigaci3n a la persona alertadora y a la entidad denunciada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTR3NICAMENTE

De conformidad con lo establecido en el art. 40.2 del Reglamento las resoluciones motivadas que pongan fin al procedimiento de investigaci3n y los que tengan naturaleza de recomendaci3n o de remisi3n de las actuaciones al 3rgano competente, no son susceptibles de recurso, puesto que no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneraci3n del ordenamiento jur3dico, ni deciden el fondo del asunto. Todo ello sin perjuicio del respeto al derecho de defensa y al derecho de acceso a la informaci3n de conformidad con lo dispuesto en la legislaci3n vigente.

C/ Navellos, 14 - 3ª
46003 VALÈNCIA
Tel. +34 962 78 74 50
<https://www.antifraucv.es>

24

CSV (C3digo de Verificaci3n Segura)	[REDACTED]	Fecha	25/01/2022 19:45:56
Normativa	Este documento ha sido firmado electr3nicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenci3 i Lluita Contra el Fraude i la Corrupci3 de la C.V.)		
Url de verificaci3n	[REDACTED]	Página	24/24